

Elecciones, Deuda social y Justicia tardía



2007 será un año de elecciones. Los municipios, las provincias y la nación se verán otra vez como escenarios de renovación o ratificación de gobernantes. No es que se muestren tantos signos de nueva política en respuesta a los cuestionamientos sociales o las crisis de representación. Pero son sin duda un ejercicio saludable que nos plantea, cada dos o cuatro años, el desafío de mirar la escena desde la butaca o meterse en el barro para transformarla.

Cuatro años de convivencia de viejas mañas con intentos nuevos son todavía poco tiempo para alumbrar un escenario más confortable. Factores de poder como el económico han buscado la manera de acomodarse, aunque a veces haya tenido que ceder algo ante el reclamo de los trabajadores, que además del aumento salarial para los activos, han empezado a incluir a los jubilados. Desde lo político el gobierno nacional ha dado buenas señales de avanzar en forma ordenada contra el negocio de las jubilaciones privadas, las AFJP, que hicieron desaparecer el aporte previsional en la timba financiera. A su vez los aparatos que cobijan a la consolidada burocracia sindical han aprovechado la nueva situación para reposicionarse a partir de las reivindicaciones de los trabajadores, aunque sin restituir aún los servicios médicos de sus obras sociales que fueron "gerenciadas" en el apogeo del neoliberalismo, para negocio de los empresarios de la medicina privada, dueños a su vez de los bancos extranjeros, que otorgaron los préstamos, los que sirvieron también para enriquecer a políticos y sindicalistas.

Pero el poder social expresado en miles de reclamos que se extienden en las distintas provincias, donde es más fácil encontrar mejores expresiones del poder sindical, también ha tallado con fuerza en la realidad social y política que vivimos los argentinos. Es probable que no toda esa fuerza social se exprese aún en las construcciones electorales que aflorarán en los meses venideros. Pero los nuevos aires que también se respiran por algunas políticas más inclusivas desde el nivel nacional, permiten avizorar avances importantes en las constantes, necesarias, inevitables y saludables disputas de poder entre sectores que se resisten a perder privilegios y otros que exigen mayor espacio de justicia y dignidad.

Las elecciones no deben analizarse como mero juego de la formalidad democrática. Valorizar el voto es darle el contenido de las políticas que todavía necesi-

tan ejecutarse desde el estado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Quizás sea un proceso más lento del deseado. Pero no se puede desfallecer en el empeño de construcciones políticas capaces de hacerse de las cuotas de poder necesario para disputar con éxito la mejor y más justa distribución de la riqueza, tanto económica, como social y cultural.

Justicia tardía

Es también en el terreno político donde hay que ubicar la disputa con los ámbitos judiciales que se resisten a ponerse a tono con las permanentes y crecidas demandas de fin de la impunidad, con juicio y castigo para los ideólogos y ejecutores del terrorismo de estado que posibilitó el ahondamiento de las injusticias sociales y el genocidio de la pobreza de tantos argentinos.

Los viejos bastiones de las formalidades democráticas, que siempre han servido para institucionalizar la desigualdad ante la ley, han reaccionado con fiereza ante las expresiones del Presidente Kirchner por la demora en los juicios a los genocidas. Se califica ahora de intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial y de no respeto a la división e independencia de poderes. Pero estos mismos voceros, con el diario La Nación a la cabeza, no decían lo mismo cuando los jueces y la Corte Suprema de Justicia de la dictadura, obedeciendo ordenes militares, negaban la libertad a los presos políticos o los habeas corpus que buscaban el destino de los desaparecidos. No se necesita que los jueces o la Cámara de Casación obedezcan ahora ninguna insinuación presidencial. Pero sí que, luego de anuladas las leyes de impunidad, no sigan retardando la justicia largamente esperada por más de treinta años. Si se proclaman tan defensores de las instituciones de la democracia deberían saber que ellas se legitiman con el consenso de la sociedad. Para eso hace falta actuaciones transparentes que restituyan la confianza social y no que se siga apañando por tradiciones familiares un poder judicial con ojos desvendados, siempre impiadoso con los débiles y complaciente con los poderosos. Dos hechos, como síntomas preocupantes, sucedieron en estos meses en nuestra provincia. El incendio de la sede tribunalicia en la ciudad cordobesa de Corral de Bustos, a manos de la indignación popular por la inacción judicial ante la violación y muerte de una menor; y "el perejilazo", la espontá-

nea movilización popular en Río Cuarto, que obtuvo la libertad del pintor Zárate, inculpaado en un crimen, el de Nora Dalmasso, donde las reales responsabilidades parecieran orientarse hacia los círculos de poderes sociales y políticos de esa ciudad del sur cordobés. Estos hechos que revelan un anquilosamiento judicial nada saludable, se repiten en otras provincias, con crímenes que siguen impunes. Y son nada más que la continuidad de aquella impunidad consagrada con los crímenes de lesa humanidad.

La detención de más represores en los últimos meses son un aliciente porque indican que también existen jueces y fiscales que han comprendido la nueva época que vive la sociedad argentina. Pero es necesario superar las demoras que impiden el juicio y la condena a los criminales. Así como seguir identificando a los investigadores, que refugiándose en sus empresas, pretenden mantener sus beneficios y privilegios, acomodando el cuerpo a la nueva situación. Ellos también han sido beneficiarios de tantos años de impunidad. Porque su desmedido enriquecimiento y la transferencia de ganancias a sus centros mundiales de las finanzas, todavía esperan de la justicia argentina una actuación que restituya el despojo sufrido por tantos ahorristas que optaron por el país, sin entrar en la especulación internacional.

Deuda social

Con la relatividad que tienen las estadísticas, y aunque suelen ser manipulables, sirven sin embargo para aproximarse en el análisis, que de todos modos siempre está enriquecido por la propia realidad, más impactante que la frialdad de los números. Quien padece cotidianamente la desigualdad social no necesita que se lo digan con porcentajes o dígitos. Pero a quienes se creen con el compromiso de apostar a transformar las realidades de injusticias, algunas cifras sirven para generalizar el análisis de las particularidades y avanzar así en el debate de las propuestas políticas tendientes a modificar la realidad. Más útiles son para señalar las responsabilidades a quienes han sido puestos en la función pública para administrar el estado y garantizar la calidad de vida de los ciudadanos.

La economía sigue creciendo y algunos indicadores sociales, como el de la desocupación, han mejorado. A fines del año pasado, volvió a un dígito (8,6%), retornando al parámetro de 1993. La pobreza se redujo al 26,9 % y la indigencia a 8,7 %. Pero el reparto de la torta sigue siendo injusto. Y esto porque la actividad económica es hoy más grande en un 40,5 %, que en el peor momento de la crisis de 2002. Es decir, que la torta se ha agrandado, sin que el reparto haya avanzado en la misma proporción. Según datos dados a conocer por el periodista económico Juan Turello, del diario La Voz del Interior, el 10 % más rico de la pobla-

ción gana 31 veces más que el 10 % más pobre. A fines de junio de 2006 el 20 % de la población con mejores ingresos se quedaba con el 52 % de la torta.

Otros datos reveladores de la concentración, extraídos del INDEC, indican que a fines de 2006 el sueldo promedio era 1.750 pesos; pero más de la mitad de los asalariados, el 54 %, ganaba menos de 1.200 pesos. Además, ratificando el desarrollo desigual, "en el noroeste y nordeste del país la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza; es decir, no puede afrontar los gastos mínimos en alimentos, vestimenta, transporte, educación y salud", afirma Juan Turello. La indigencia, los que no pueden comprar ni los alimentos mínimos, alcanza a uno de cada tres pobres. Al mismo tiempo en la costa atlántica y en la zona de la pampa húmeda, beneficiada por las actividades agroalimentarias, hay niveles récord de consumo. Un detalle revelador es que el 80 % del cemento que se produce se destina a obras en la Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Los beneficios del "boom" de la soja y de la construcción no llegan, ni social ni geográficamente, de manera equitativa.

Esto ratifica la persistencia de un esquema de desarrollo que no alcanza a todas las regiones por igual. Y que además de afectar la calidad de vida de los argentinos, en un país que marcha a ritmos diferentes, atenta contra una efectiva integración y un sano federalismo.

La política de subsidios, especialmente al transporte, así como la del control de precios, que funcionan en zonas altamente concentradas poblacionalmente, como la capital federal, decreciendo en las principales ciudades del interior e incluso en los cordones industriales y zonas suburbanas, donde se concentra la clase trabajadora y los pobres, señala un criterio al menos contradictorio. Que los recursos públicos generados a partir de la concentración impositiva y manejados por el poder central, se destinen a las zonas más pobladas, pareciera responder a un criterio de justicia. Pero si al mismo tiempo, esos recursos no llegan principalmente a los sectores más desprotegidos, como sucede por ejemplo con el control de precios, queda la sensación de que lo que prima es un criterio de publicidad política, favoreciendo un modelo de concentración del poder, en sus diversas variantes, - económicas, sociales y políticas, - que no favorece la ampliación de un concepto de democracia integral y justicia social. Y menos de integración nacional, porque se deja librada a su propia suerte a las provincias menos favorecidas económicamente, las del noroeste y nordeste, que son a su vez las que más sufren las consecuencias del feudalismo político asentado en el clientelismo electoral.

Córdoba, abril de 2007
Luis Miguel Baronetto